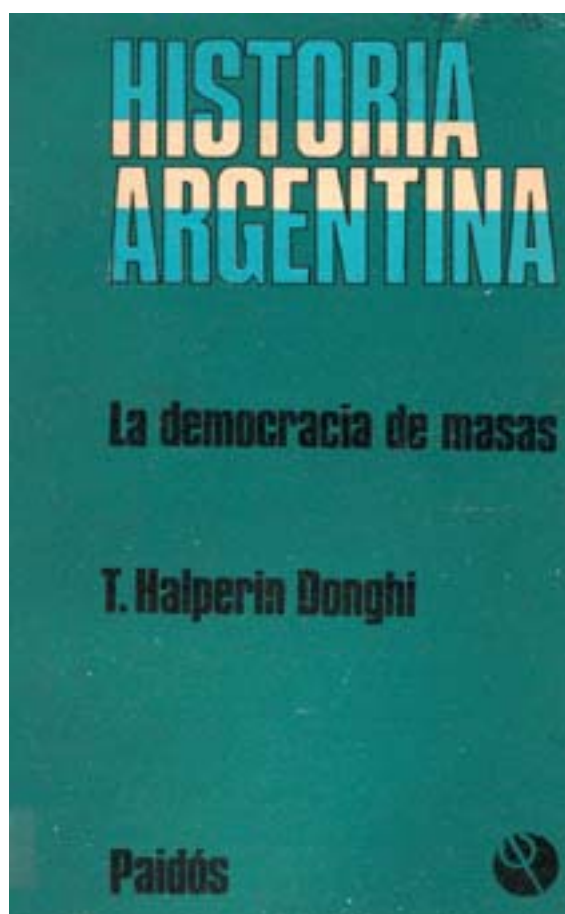


ARGENTINA

La democracia de masas

Tulio Halperin Donghi



Editorial PAIDOS

Colección Historia argentina

Buenos Aires

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos

ÍNDICE

Índice de figuras

POLITICA Y SOCIEDAD

1. ARGENTINA 1943
 1. Un sistema político en disgregación
 2. Una sociedad que secretamente se transforma
2. UNA REVOLUCION QUE BUSCA SU RUMBO
3. LA ARGENTINA PERONISTA
4. DESPUES DEL PERONISMO
5. LAS EXPERIENCIAS CONSTITUCIONALES BIBLIOGRAFIA

Índice de nombres y lugares

Índice de temas

3. LA ARGENTINA PERONISTA

El 17 de octubre la Confederación General del Trabajo dispuso una huelga general, dificultosamente impuesta por el sector de dirigentes más adictos al secretario de Trabajo (los más abiertamente hostiles a éste habían ya retirado a sus sindicatos de la organización). Esa orden había sido anticipada en algunos puntos del país con movimientos locales en apoyo del prisionero de Martín García, particularmente eficaces en Tucumán. Ahora eran el cinturón industrial de Buenos Aires y el distrito de frigoríficos cercano a La Plata los protagonistas de la jornada: a lo largo del día una muchedumbre obrera comenzó a volcarse en los accesos meridionales de Buenos Aires, y avanzó pacíficamente hacia el centro de la ciudad, sin encontrar resistencia, ni de parte de la policía, que por lo contrario le brindó abierto apoyo, ni de los núcleos de resistentes, que permanecieron en total pasividad. Al mismo tiempo una gestión de oficiales adictos a Perón lograba obtener del presidente Farrell la orden de traslado del prisionero al Hospital Militar; luego de largas discusiones entre los jefes militares, el presidente fue autorizado a liberar a Perón y constituir un gabinete distinto del que finalmente había integrado el doctor Alvarez. La buena nueva fue comunicada a la multitud adicta desde los balcones de la Casa Rosada; los discursos de Farrell y Perón constituyeron la inauguración de la campaña electoral que iba a ser la última etapa de la revolución de junio.

Este desenlace desconcertó por muchas razones a la oposición. En primer término por la aparición en escena de un sector dispuesto a dar apoyo decidido a la tambaleante causa representada por el gobierno militar; en segundo lugar por la extracción de ese sector, reclutado en esas clases populares en las que la oposición había encontrado por más de diez años su más segura clientela política. Sin duda, antes que admitir que sus perspectivas, tan seguras en apariencia, habían quedado súbitamente comprometidas, la oposición se dedicó a negar toda importancia a lo ocurrido: para ello invocaba no sólo hechos ciertos pero menos decisivos de lo que gustaba de imaginar (como lo era el apoyo oficial que el movimiento del 17 había encontrado) sino también interpretaciones totalmente fantasiosas, como la propuesta por los partidos de vocación obrera que contaba en su seno, para los cuales se había asistido tan sólo a una tormenta sin futuro, debida a la agitación ciega y turbia del *Lumpenproletariat*. Por lo contrario, la jornada había contribuido a dividir al país político según líneas de clase, y por no advertir la intensidad del cambio y los riesgos que para ella implicaba la oposición iba a ahondarlo aun más con sus sucesivas actitudes.

Al mismo tiempo el retorno al clima electoral imponía al frente opositor una transformación para la cual no todos sus integrantes estaban preparados: los partidos contaban ahora más que en la etapa dejada atrás, y a ello se sumaba la gravitación cada vez más abierta de los organismos representativos de intereses: la Unión Industrial, más aún que la Sociedad Rural, ocupaba la primera trinchera en la lucha por la democracia: este acceso al papel protagónico era a su modo un nuevo signo de que el conflicto político se estaba transformando en lucha social. El gobierno se encargó por su parte de facilitar la transición: a fines de año impuso fuertes aumentos salariales y el pago obligatorio del aguinaldo (mes adicional de sueldo), las organizaciones patronales respondieron con un unánime *lock-out* que fue considerado también un eficaz instrumento de propaganda opositora. Las oposiciones, en efecto (salvo en este punto el Partido Comunista) condenaban enérgicamente las generosidades oficiales con el sector asalariado, en las que denunciaban una segura causa de inflación; de este modo se precipitaban a ocupar el lugar en que sus adversarios esperaban verlas ubicadas.

A la vez el plazo electoral cercano (las elecciones debían efectuarse el 24 de febrero) obligaba a la oposición a decisiones rápidas y no siempre fáciles. En el radicalismo, núcleo necesario de cualquier frente opositor, seguía muy viva la tendencia adversa a toda política de coalición; el apoyo de los sectores alvearistas a la Unión Democrática no hacía sino agudizar la hostilidad a ella de sus adversarios internos. Los partidos menores ubicados a la izquierda del radicalismo (el socialista, el comunista, el demócrata progresista) estaban ganados de antemano a la política de coalición, pero su poderío electoral era limitado, y aportaban a cualquier frente opositor la hostilidad decidida de la jerarquía eclesiástica. El conservadorismo planteaba un problema delicado: dispuesto a integrarse en la unión opositora, controlaba mal a dirigentes locales que a menudo se aproximaban de modo abierto al oficialismo, y enfrentaba además la hostilidad implacable del radicalismo, que vetó su ingreso en la Unión Democrática. Esta, por otra parte, no se iba a concertar sino para la elección presidencial, y aun en ella al servicio de una fórmula exclusivamente radical (era ese el precio de la difícil aceptación del pacto interpartidario por el radicalismo). En las elecciones de legisladores y en las provinciales la propuesta comunista de formar listas únicas fue en casi todas partes rechazada por decisión del radicalismo, apoyada en este caso por el socialismo, seguro de su mayoría en la Capital y poco dispuesto a compartir los frutos de su hipotética victoria. Ante el fracaso de la táctica por él propuesta, el partido Comunista ganó por lo menos la adhesión del Demócrata Progresista para la

presentación de listas “de Unidad y de la Resistencia” destinadas a aumentar sus adhesiones entre los adictos a esta última al identificarse ambiciosamente con ella, pero sin duda no a acrecentar la gravitación del frente opositor en el conjunto del electorado: luego de la victoria aliada comenzaban a llegar, aunque lentamente, a la Argentina los ecos de la reorientación que comenzaba a darse entre los vencedores, y por otra parte las reticencias frente al comunismo habían estado aun antes de ello más difundidas de lo que el súbito entusiasmo surgido en 1944 y en 1945 de tantos inesperados rincones podía hacer suponer.

Bajo esos ambiguos auspicios la oposición se preparó para la jornada de la que se obstinaba en esperar una segura victoria. A fines de diciembre era proclamada por el radicalismo la fórmula Tamborini-Mosca; sus dos integrantes provenían de las filas alvearistas (ahora rebautizadas unionistas) y no gozaban de demasiada vasta popularidad. Ya para entonces otra coalición (formada por el Partido Laborista, que reunía al séquito sindical de Perón, la Unión Cívica Radical-Junta Renovadora, integrada por radicales disidentes, el Partido Patriótico, en que se refugiaron antiguos conservadores y nacionalistas, y aun otras agrupaciones menores) había proclamado la fórmula Perón-Quijano. La campaña podía ya comenzar, y prometía ser muy peculiar. Ambos candidatos recorrieron el país en ferrocarril; la mayor parte de la prensa presentaba el avance del Tren de la Democracia como un paseo triunfal, sólo interrumpido por los atentados en los que se invitaba a reconocer el despecho de un adversario seguro de su derrota; la marcha de la caravana oficialista era seguida por esa prensa con menos afecto, y aparecía puntuada de escándalos políticos, no siempre imaginarios o magnificados (la disciplina interna de la coalición peronista era escasa, y hubo casos –como el de San Juan– en que ésta se deshizo clamorosamente pese a los esfuerzos del candidato por componerla).

A lo largo de esa campaña la oposición tuvo tiempo de madurar una nueva imagen del bloque adversario, cuyo origen se encuentra en los acontecimientos de octubre. Si la candidatura de Perón seguía siendo juzgada tan imposible como antes, si su éxito seguía siendo por definición impensable, ello se vinculaba menos con las tendencias fascistas atribuidas al candidato que con su escandalosa ruptura con un estilo político –y no sólo político– en el cual habían coincidido en el pasado quienes se ubicaban ideológicamente en posiciones opuestas. Desde el 17 de octubre, Perón era el jefe de los “descamisados”, y esta designación no era tan sólo simbólica; muchos de sus adictos habían sido vistos en ese día por las calles privados de esa prenda, y aunque el jefe del movimiento se negó constantemente a las solicitudes de la multitud adicta que lo invitaban a imitarla, se exhibía impudicamente sin saco... Estas chocantes innovaciones de estilo alcanzaron nivel más significativo en el matrimonio de Perón y Eva Duarte, quien –según muchos creían– había tenido parte importante en la preparación de la jornada de octubre y parecía dispuesta a adoptar un desgarrado estilo de militancia antes que la decorosa reserva que la tradición argentina impone a las mujeres ubicadas en la situación en la que ahora venía a encontrarse.

De este modo la oposición adecuaba la perspectiva desde la cual contemplaba el conflicto político argentino al lugar que en él había terminado por ocupar como defensora del orden establecido y de las jerarquías tradicionales. Pero no sólo de ellas; sectores enteros de la oposición (y no sólo por cierto los más conservadores) no se resistían a exhibir como seguro anticipo de triunfo el espaldarazo que la potencia ahora indiscutiblemente hegemónica le había dado; el señor Braden, desde su nuevo cargo de secretario adjunto de Estado iba a prestar un nuevo y aun más catastrófico servicio a sus amigos argentinos haciendo publicar en vísperas electorales un memorándum destinado a la consulta de las demás naciones americanas, en que evocaba una vez más los pasados contactos de los círculos gobernantes argentinos con las potencias fascistas. El Libro Azul (tal como se denominó al singular documento) era incompleto en cuanto –según admitía con sobria franqueza– sólo incluía los nombres de los pecadores que aún no se habían enmendado de pasadas faltas (ha de suponerse que transfiriendo su lealtad política de modo más agradable a los compiladores del libro). Aun más grave era que tenía la clara finalidad de influir en la cercana jornada electoral, no tanto por los datos que aportaba cuanto por la declaración de hostilidad que implicaba para el candidato oficialista, presentado como antiguo agente del Eje con una violencia que parecía excluir cualquier posibilidad de futura reconciliación. Esa aventura política a la que se había lanzado el señor Braden, que no necesitaba para alcanzar éxito del apoyo de los sectores antiperonistas, contó sin embargo con él; demasiado tiempo alejada del poder, la oposición hallaba vigorizante el contacto, no sólo de las agrupaciones de intereses cuyo fervor democrático resultaba algo inesperado, sino también la de la que, a punto de desvanecerse la solidaridad antifascista, estaba llegando a ser lisa y llanamente la potencia hegemónica. Al hacerlo, no sólo venía a revelar hasta qué punto la crisis argentina había debilitado los sentimientos de solidaridad nacional, sino cómo ahora los papeles se habían trocado, y era el bloque opositor el que veía la situación desde la perspectiva de una guerra santa, mientras el heredero del movimiento de junio preparaba minuciosamente un enfrentamiento electoral.

Esas nuevas actitudes obviamente no favorecían las posibilidades que la oposición tenía de triunfar en él. De hecho aceptaban –así fuera implícitamente– como un hecho consumado la pérdida del séquito

popular que durante más de un decenio había sido, pese a la tibieza de su ánimo militante, la principal base política de los partidos ahora opositores. Pero no por ello le proporcionaban nuevas adhesiones reclutadas entre los amigos del orden y enemigos de novedades, que forman en la Argentina un grupo considerable; más interesados en matices ideológicos y mejor dotados de memoria política que los sectores populares en proceso de absorción por el peronismo, muchos de esos amigos del orden no habrían de olvidar fácilmente la trayectoria anterior de la coalición opositora; no podían ignorar tampoco que en el frente peronista, si la fuerza electoral venía sobre todo de esas clases populares que siempre les habían inspirado viva desconfianza, seguía siendo determinante la gravitación de instituciones que, como el ejército y la Iglesia, parecían ofrecer garantía suficiente contra aventuras demasiado riesgosas. De este modo la reorientación conservadora de la Unión Democrática agravaba pero no siempre compensaba la pérdida de adhesiones populares que ya había venido sufriendo.

El 24 de febrero las elecciones dieron al frente peronista una victoria que el lento escrutinio tardó quince días en revelar completamente: de los 2.734.386 votos emitidos, la fórmula oficialista recibió 1.527.231 y la opositora 1.207.155. La Unión Democrática sólo obtuvo mayoría en cuatro provincias; tres de ellas (Corrientes, San Juan y San Luis) eran marginales y el voto conservador –volcado en esos distritos a la oposición– había contribuido allí más que el radical a asegurar la victoria; aun en Córdoba, donde la Unión Democrática venció por muy estrecho margen, el aporte conservador, aunque reducido, fue determinante. En la Capital y en las provincias mayores la derrota de los candidatos opositores se daba por márgenes considerables: así en la de Buenos Aires el radicalismo era vencido en la disputa por la gobernación por el Partido Laborista, que se presentaba separado de los demás grupos peronistas y cuyo caudal electoral superaba por otra parte el de todos los grupos opositores sumados; esa victoria laborista no era tan sólo la del denso voto obrero de los suburbios industriales de Buenos Aires, sino también la de macizos bloques electorales antes conservadores afincados en distritos rurales que encontraban menos inhóspito el laborismo que el radicalismo disidente. Sin embargo la amplitud de la penetración peronista en el campo no se debía tan sólo a su capacidad de heredar buena parte de la clientela del declinante conservadurismo: en los últimos meses de 1945, Perón había comenzado a proponer soluciones relativamente radicales para el sector agrario; una propaganda muy intensa, sin adelantar proyectos precisos de reformas, denunciaba el escándalo de la gran propiedad ausentista, el de la especulación en tierras, y declaraba que ellos sólo concluirían cuando la tierra dejara de ser un bien de renta para transformarse en bien de trabajo; esa fórmula permitía entrever reformas audaces, la más modesta de las cuales era la entrega en propiedad de las tierras por ellos trabajadas a los arrendatarios. No cabe duda de que por lo menos una parte de la adhesión que el peronismo encontró en las áreas agrícolas se debió a las esperanzas que vino a despertar y que le permitieron realizar avances importantes en algunas zonas como las cerealeras, en las cuales los partidos opositores –en especial el radical– conservaban sólido arraigo. Menos éxito obtuvo el peronismo en las áreas ganaderas; pero si en ellas el Estatuto del Peón no había cambiado decisivamente los datos básicos del equilibrio político, su reducida población limitaba las consecuencias de ese fracaso parcial.

En el interior el peronismo alcanzaba sus mejores victorias en los oasis de agricultura moderna del norte; en las tierras menos tocadas por la modernización económica sus éxitos eran menos marcados y se detenían en los rincones más arcaicos. En estas regiones el nuevo movimiento estaba lejos de haber explotado todas sus posibilidades; aún no había tenido tiempo de erigir, frente a las máquinas de los partidos tradicionales, la que el dominio del Estado le permitiría establecer más adelante. Los avances que vendrían en esas áreas marginales y los más limitados que alcanzaría en la ganadera del Litoral permitirían al peronismo conservar en el futuro suficientes apoyos rurales, pese a las decepciones que su política iba a aportar a sus adherentes en las tierras del cereal, donde la congelación de los arrendamientos no sería seguida de cambios más esenciales, mientras la política de precios iba a privar a los agricultores –propietarios y arrendatarios por igual– de la mayor parte de las ganancias de los años de posguerra, la sindicalización de los peones temporarios afectaría con mayor dureza a los menos prósperos entre los cultivadores. Tantos engaños provocaron una desafección política que no alcanzó sin embargo consecuencias demasiado graves para el régimen: algunos departamentos rurales de Santa Fe tuvieron gobiernos locales opositores, pero en gran parte de ellos bastaban las sólidas mayorías peronistas de los centros urbanos secundarios para equilibrar las deserciones en el voto rural.

En las ciudades de la Argentina modernizada, y en particular en Buenos Aires, el voto se dividía ahora según estrictas líneas de clase; en la Capital el área ganada por la oposición cubría los barrios más prósperos y se internaba, siguiendo las grandes avenidas, en las barriadas populares, sin alcanzar a quebrar allí las sólidas mayorías peronistas, que se hacían abrumadoras en los suburbios industriales. De las elecciones surgía entonces el perfil de un nuevo movimiento político, obrero en las zonas más dinámicas de la Argentina urbana, identificado con los sectores asalariados en las tierras de ganadería litoral,

genéricamente popular y apoyado en una red de clientelas que repetía en lo esencial la de partidos más tradicionales en el resto del país. Ese movimiento, heterogéneo como el país en el cual surgía, tenía un elemento esencial de cohesión en su vigoroso personalismo; había nacido como el séquito de un caudillo que, no sólo en las áreas tradicionales sino también en las más modernas, retomaba la función de mediador entre los sectores populares y el hosco y casi abstracto poder del Estado. Los dirigentes sindicales de tradición socialdemócrata o sindicalista, y los cazurros políticos provincianos llegados del radicalismo o el conservadorismo, que habían coincidido en creer que podrían participar de manera decisiva en la orientación del nuevo movimiento, descubrieron bien pronto que su capacidad de decisión autónoma era ilusoria. y ello no sólo porque el jefe supremo (que no tenía nada de ese candor rayano en la tontería que la mitología política argentina se obstina en atribuir al sector profesional que dio a la vida política a Mitre, Roca y Justo) estaba firmemente dispuesto a usar todo su poder –el que le daba el dominio del Estado, el que le venía de su arraigo en el ejército, el derivado de su alianza con la Iglesia– para mediatizar a sus seguidores y colaboradores inmediatos, sino también porque, desde el comienzo, la adhesión popular tendía a orientarse directamente hacia quien era el líder por antonomasia del movimiento, y los que se habían integrado en él como jefes de clientelas políticas o sindicales podían ahora descubrir que habían perdido su dominio sobre ellas, y que su único futuro posible era el de funcionarios disciplinados de una máquina que aspiraba a englobar al Estado, al partido y a los sindicatos.

Ese personalismo apresuró la consolidación del movimiento, y a la vez frustró desde muy pronto los avances de su institucionalización. ¿Hasta qué punto era esto el resultado de una política deliberada? Sin duda las demasiado frecuentes invocaciones de Perón al impreciso futuro en que su presencia ya no sería necesaria eran de sinceridad poco creíble; sin duda iba a usar una vez y otra su ascendiente personal para eliminar, antes de que se hiciera peligroso, a cualquier posible rival. Pero, aun sin tomar en cuenta todo ello, el personalismo era una consecuencia casi inevitable del proceso del que surgió el movimiento peronista.

Ese personalismo permitía augurar un rápido retorno al estilo autoritario que el gobierno militar había abandonado a lo largo de 1945; el séquito popular que el triunfador del 24 de febrero había logrado reunir lo consideraba por otra parte un rasgo natural del nuevo orden político, y la insuficiente institucionalización, la fragilidad nunca superada del bloque político triunfante, requerían una dirección rígida para salvarlo de las asechanzas que desde él mismo y desde una oposición desconcertada, pero enconada por la derrota, se levantaban contra su hegemonía. Desde febrero de 1946 la marcha hacia la dictadura parecía inscrita en las cosas mismas y fue facilitada en cierta medida por la actitud de las oposiciones, para las cuales la victoria electoral no había otorgado legitimidad al gobierno de ella surgido. Luego del primer desconcierto –agravado por el entusiasmo con el cual, antes de conocer el resultado, los líderes de los partidos opositores se habían apresurado a proclamar la total corrección del proceso electoral– esas oposiciones parecían templarse para un período previsiblemente prolongado de semiostracismo político, y veían sin indulgencia las tentativas de establecer con el nuevo partido gobernante relaciones menos sistemáticamente hostiles; así la adopción por parte del Partido Comunista de una línea más flexible sirvió para que sus anteriores aliados se disociaran rápidamente de él (estimulados para ello por otra parte por la evolución política mundial).

La orientación autoritaria realizó progresos lentos pero constantes a lo largo de toda la etapa peronista. En 1947 la clausura de los semanarios políticos que habían tenido tan vasta resonancia dos años antes marcó la primera limitación importante de la libertad de prensa; en 1951, tras incorporar a la línea oficialista a la mayor parte de los diarios del país, la expropiación de *La Prensa*, entregada a la gestión de la Confederación General del Trabajo, significó una advertencia precisa a los sobrevivientes; sólo *La Nación*, con la tirada estrictamente limitada por el racionamiento oficial del papel, mantuvo una actitud cautamente independiente... A través de la prensa diaria, como de la radio (sometida a un régimen de permisos que facilitó su compra por figuras adictas al gobierno) se oía ahora la voz de la Secretaría de Prensa y Difusión, que no sólo fijaba la actitud que se debía asumir ante las grandes alternativas políticas, sino dosaba, en minuciosas instrucciones cotidianas, el grado de publicidad otorgado a cada una de las figuras del elenco gobernante (tras una tupida campaña de contumelias, los medios de difusión en manos del gobierno terminaron por cubrir a toda la oposición con un espeso manto de silencio). Esa propaganda lograba dar a la vida argentina el tono de unánime frenesí político característico de las modernas dictaduras que han hecho del manejo de la opinión pública uno de sus más cuidados *instrumenta regni*; ese tono era puntualmente desmentido en cada ocasión electoral, que revelaba la presencia de un irreductible núcleo opositor integrado por un tercio del electorado, al parecer insensible a los argumentos de una propaganda más abrumadora que sutil.

En todo caso la propaganda iba acompañada por un instrumento más tradicional y acaso más eficaz: el empleo masivo de la intimidación. El peronismo no tuvo que inventar el de las cárceles y torturas como

arma política; lo encontró en el arsenal de recursos de uso relativamente frecuente desde 1930; su empleo más asiduo fue facilitado sin embargo por el reemplazo del estado de sitio (que tenía el inconveniente de haber dado lugar a una compleja elaboración jurisprudencial, que limitaba considerablemente el margen de arbitrio dejado al Poder Ejecutivo) por la novedosa figura política que era el estado de guerra interno, instaurado en 1951. Tampoco fue creador exclusivo de la intimidación económica; aquí volvió más bien a usos que la preocupación por la defensa del derecho de propiedad, dominante en la Argentina a partir de 1853, había atenuado pero no hecho desaparecer del todo, y para los cuales la intervención creciente del Estado en la regulación de la economía ofrecía posibilidades nuevas que el régimen peronista no iba a desdeñar. Ese uso cada vez más amplio de la intimidación requería una magistratura adicta: en 1949 cuatro de los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia eran sometidos a juicio político y destituidos; después de ello y de una depuración menos radical del resto del Poder Judicial el gobierno pudo contar con la docilidad de sobrevivientes y reemplazantes, salvo inesperadas excepciones que eran corregidas de inmediato con nuevas destituciones.

El mismo estilo autoritario se impuso aun más decididamente en el manejo interno del frente oficialista. Perón comenzó aquí por aplicar con extremo virtuosismo la táctica que consistía en dejar aflorar las tensiones internas en el algo improvisado movimiento hasta que, amenazada la cohesión de éste, podía asumir el papel de árbitro universalmente solicitado. Bien pronto, sin embargo, todo virtuosismo se hizo innecesario, porque su predominio ya no era discutido ni amenazado y sólo le quedaba ejercitarlo a su guisa. Tanto en el sector político como en el sindical lo usaría para promover dirigentes incapaces de constituir en ningún momento una amenaza para su propio predominio; esa meta orientó los esfuerzos por transformar la coalición triunfante en un partido unificado: en mayo de 1946 se creaba el Partido Único de la Revolución Nacional, en el cual los adherentes surgidos de los partidos tradicionales se encontraban sobrerrepresentados. Esto motivó resistencias entre algunos de los sindicalistas nucleados en el Partido Laborista, en particular en el señor Cipriano Reyes, dirigente de los obreros de frigorífico que –desde el 17 de octubre– se consideraba líder de sectores aun más amplios de la clase obrera. La resistencia de Reyes y de otros dirigentes laboristas contribuyó tanto como la general indisciplina de las filas peronistas a restar eficacia a la nueva organización política, que a comienzos de 1949 dejaba el paso a un nuevo partido oficialista, que tomó el nombre de Peronista, destinado a persuadir a los que se obstinaban en dudarle de que el apartamiento de él implicaba una ruptura con el propio presidente. Desde entonces la disciplina del oficialismo, organizado de modo abiertamente autoritario (según los estatutos del nuevo partido correspondía al general Perón designar sus autoridades supremas), sólo conoció quiebras episódicas. El mismo proceso iba a darse en la Confederación General del Trabajo; en enero de 1947 era aceptada la renuncia del secretario general, Luis Gay, veterano dirigente telefónico, sospechoso de mantener veleidades de autonomía frente a la autoridad presidencial. Fue reemplazado por un ex comunista, Aurelio Hernández, considerado más dócil, que sin embargo no iba a permanecer un año en su puesto: fue reemplazado a su vez por José Espejo, cuyo limitado prestigio y modesta trayectoria en el movimiento sindical constituían garantías aun más sólidas de disciplina.

Ese aparato político y sindical centralizado requería una continua vigilancia; en esta compleja tarea –que hubiera exigido una atención incompatible con la que por otra parte imponía el gobierno del país– Perón contó con el auxilio valiosísimo de su esposa: desde su oficina de la Secretaría de Trabajo y Previsión, María Eva Duarte de Perón (nombre que se asignó luego de su casamiento, cuando aún se hallaba insegura sobre su papel futuro, y que luego abrevió en el más contundente de Eva Perón) estaba escasamente limitada en su libertad de iniciativa por la presencia de un ministro, elegido también él por su opaca personalidad. Pero bien pronto la actualización de la lista de réprobos y elegidos dentro del movimiento político y sindical, tarea a la que se consagró con fervor, fue la más liviana de las que quedaron a cargo de Eva Perón; las jornadas de octubre no habían agotado la posibilidad de introducir elementos nuevos en el equilibrio político argentino; Eva Perón iba a ocuparse de incorporar más sólidamente a él los sectores marginales de población, a ese subproletariado urbano, a esas clases populares de las provincias más tradicionales para las cuales el nuevo derecho laboral y el nuevo poder de los sindicatos significaban muy poco. La Obra Social por ella organizada a través de la Fundación que llevaba su nombre, no sólo llegó muy eficazmente a ese quinto estado al cual los avances del cuarto no habían tocado; sus servicios fueron finalmente utilizados por grupos cada vez más amplios de población, y contribuyeron a quitar aspectos importantes de la función asistencial de manos de las organizaciones privadas de inspiración piadosa y composición aristocrática que en el pasado habían recibido del Estado atribuciones y fondos para ejercitarla. En la Fundación iban a coexistir, de manera característica en la Argentina peronista, una arbitrariedad de sabor arcaico, que dejaba caer las gracias desde lo alto a una multitud edificada y agradecida, y tendencias a la modernización que el debilitamiento de la hegemonía de una clase alta muy tradicionalista en su modo de encarar sus relaciones con el resto del cuerpo social hacía posibles: junto con mucha obra inútil y mucho derroche suntuoso, que llevó a la Fundación a

parecer en algún momento el instrumento de una forma colectiva y algo delirante de consumo conspicuo, a esa vasta obra social se deben algunos hospitales de organización inesperadamente eficiente, y las primeras tentativas de introducir entre los problemas dignos de atención pública el de la difícil adaptación de los migrantes internos al nuevo contorno urbano. Arcaísmo y modernidad eran puestos –y muy abiertamente– al servicio de una finalidad política; la Fundación era el lazo de unión entre el gobierno y esos sectores genéricamente populares que el peronismo llamó los humildes. No sólo el encuadramiento de los humildes, también el de las mujeres figuró entre las tareas políticas asumidas por Eva Perón. Tras dirigir una campaña en favor de la concesión del voto femenino, que de modo nada sorprendente fue otorgado muy rápidamente por el parlamento, se consagró a organizar la sección femenina del partido oficial (que terminaría por ser una de las tres ramas de él, junto con la masculina y la Confederación General del Trabajo).

El peronismo seguía así aplicando la táctica de evocar nuevas fuerzas sociales para equilibrar las viejas; cuanto menos espontánea era esa entrada de nuevos grupos en la vida política, mayor docilidad mostraban éstos hacia quienes les habían asegurado su lugar en ella. De este modo la ampliación constante de la movilización política inaugurada en octubre, lejos de aumentar las potencialidades revolucionarias del movimiento peronista, las hizo menos significativas: el partido de sindicatos, que por un momento pareció constituir el núcleo del peronismo, era diluido en un más vasto movimiento en el que el peso de las clientelas populares más superficialmente modernizadas era numéricamente determinante, y en el que a la vez –gracias a la centralización de la ayuda social en un organismo formalmente separado de la estructura partidaria– el peligro de disgregación en beneficio de figuras de prestigio sólo local era resueltamente esquivado.

El equilibrio así alcanzado dentro del movimiento peronista aseguraría a su conductor una considerable libertad de acción, limitada sobre todo por la necesidad de no volver bruscamente sobre la redistribución de ingresos que había sido el aspecto políticamente decisivo de su acción económica. Esa libertad era pagada sin embargo al precio de una constante ambigüedad en cuanto al sentido mismo de su acción, y de las transformaciones que ésta promovía en el marco político-social en el que había surgido.

Esa ambigüedad iba a ser reprochada –con diferencias sólo de tono– por todos los sectores vinculados con tradiciones ideológicas de izquierda, aun por los que se mostraron más dispuestos en su momento a prestar apoyo a la experiencia peronista. ¿El reproche es justo? Notemos en primer lugar que el peronismo no pudo traicionar un programa revolucionario que nunca fue el suyo; el papel de alternativa sustancialmente conservadora a una hipotética revolución social no surge tan sólo de un análisis de su trayectoria realizado con escaso afecto por adversarios o demasiado exigentes aliados, es el que el propio peronismo, por boca de su jefe, reivindicó orgullosamente para sí. Pero el problema puede todavía plantearse en otro plano, en el que el examen puede llevar a algo más interesante que a un inventario de dudosas culpas y traiciones. Cualquiera que fuese su orientación, cualquiera que fuese el sentido de su acción política, las adhesiones y las oposiciones que había encontrado en su camino hacían del peronismo el movimiento político más cercano a las bases populares, en las áreas modernizadas tanto como en las tradicionales del país; sólo el yrigoyenismo de la última etapa, el de 1928, había ocupado un lugar comparable en el marco de la sociedad argentina. Y esas bases mismas, ¿podían verse indefinidamente satisfechas con una acción que limitaba con cuidado la amplitud de la renovación promovida en su beneficio?

El inventario de culpas deja así paso a un conjunto de hipótesis sobre la índole del peronismo y sus apoyos. Para muchos de sus críticos, las bases populares del movimiento se hubieran sentido mejor expresadas por una línea política más decididamente innovadora, y las preferencias del jefe supremo por los métodos autoritarios no sólo nacían de peculiaridades de temperamento y formación, sino del deseo de controlar mejor esa peligrosa fuente de energías revolucionarias formada por sus propios adictos. Sin embargo, esta hipótesis encuentra muy escasa confirmación en los hechos. La progresiva afirmación de la autoridad de Perón sobre su movimiento, si encontró sin duda resistencias, no las halló en portavoces de ninguna corriente más radical que la suya propia. Por cierto el giro autoritario privó al peronismo de la posibilidad de cualquier evolución espontánea, pero cada vez que esa espontaneidad hallaba, a pesar de todo, manera de expresarse, se traducía en una tendencia a la disgregación más bien que a la radicalización del movimiento. Esto explica en parte que el autoritarismo de la conducción política haya podido contar siempre, contra las ocasionales rebeliones de dirigentes menores, con el apoyo de la base, que no se sentía identificada con las aventuras estrictamente personales que esos episodios de rebeldía significaban.

Cuando el peronismo se presenta como un movimiento popular ardientemente hostil a los sectores altos y a la vez esencialmente respetuoso de un orden que asegura a esos sectores altos el lugar que han alcanzado, está dando entonces expresión fiel a las tendencias que animan a los grupos populares que le brindan su apoyo político. Esos grupos siguen siendo decisivos para asegurar las sucesivas victorias electorales del movimiento, pero, aunque se las otorgan cada vez más categóricas, no serían suficientes para garantizar la estabilidad política del régimen. Junto con los obreros, el ejército y la Iglesia son sus apoyos

indispensables, tal como lo admite Perón en los meses finales de 1945, y el ejército y la Iglesia plantean problemas y exigen la adopción de tácticas diferentes que los sectores populares.

Con la Iglesia el peronismo iba a mantener relaciones agrídulces. Sin duda, cumpliendo promesas electorales, hizo ley el decreto que había introducido la enseñanza religiosa en las escuelas, y cuidó de mantener el signo católico a la obra de asistencia social cada vez más centralizada en manos de la esposa del presidente, y a cambio de todo ello siguió recibiendo muestras suficientemente claras de benevolencia por parte de la mayoría de nuestros prelados. Pero al mismo tiempo la reforma profunda del sistema asistencial, que si le conservaba su sello católico le agregaba uno político mucho más vigoroso, y la politización que estaba imponiéndose con igual vigor a la enseñanza debían crear tensiones nuevas. Por otra parte la Iglesia no hallaba fácil la opción entre sus tradicionales apoyos en las clases altas y sus nuevos aliados; encontraba a la vez penoso e imprudente dar a su aprobación del nuevo orden político la expresión algo atronadora que éste parecía exigir de sus adictos; no se resignaba en suma a pasar de aliada a sometida. Los límites del apoyo eclesiástico pudo advertirlos Eva Perón durante su viaje europeo de 1947: la recepción que halló en el Vaticano fue más cortés que cordial, y el Papa se abstuvo de otorgarle las distinciones que acaso había esperado recibir... Desde entonces el régimen y la Iglesia comenzaron a tomar distancia; en 1951 los confesionarios (a los que se suponía que el voto femenino había hecho más influyentes) se abstuvieron de orientar a perplejos penitentes hacia las listas electorales oficialistas, pero ello no impidió una victoria peronista aun más amplia que en el pasado. Aunque los enfriamientos y los acercamientos se sucedieron, los primeros se vieron limitados en sus consecuencias por el hecho de que el peronismo había debido reclutar su burocracia y su magistratura allí donde encontraba ánimos dispuestos a servirlo, y en ninguna parte los halló más serviciales, en los primeros años de su gestión, que en los círculos católico-conservadores (o aun católico-fascistas) a los que la nueva coyuntura mundial había dejado sin soluciones políticas a las cuales otorgar su lealtad. De este modo aun en las etapas en que la cúspide del sistema mostraba abierta frialdad a la Iglesia esta actitud hallaba difícil alcanzar los niveles más modestos desde los cuales podía llevar a consecuencias concretas; la alianza de 1944-46 dejaba entonces paso en los hechos a una separación de esferas de acción acaso conveniente para ambas partes.

Diferente era la situación en el ejército, cuyos humores no podían ser ignorados y que, tras haber hecho posible el surgimiento del peronismo había mostrado frente a él sentimientos mezclados. Una prudente atención al equilibrio interno en el cuerpo de oficiales, que aseguraba la primacía a ciertas *cliques* (consolidadas a veces por alianzas familiares) demasiado identificadas con el régimen para que pudiera partir de ellas iniciativa alguna contra él, la distribución de beneficios económicos que –sin alcanzar los niveles de ciertas dictaduras militares latinoamericanas– mejoraron considerablemente la situación de los oficiales como grupo profesional, el uso de incentivos del mismo orden para aguzar el celo de los más adictos fueron los medios favoritos de control del ejército. Al mismo tiempo, la necesidad de conservar el apoyo militar fijaba ciertos límites a la libertad de movimientos del jefe del peronismo. Este –siguiendo aquí una vieja tradición argentina– quiso definir su vínculo con el ejército no sobre una base personal o política, sino institucional: las fuerzas armadas, al apoyarlo, no hacían sino cumplir su deber frente al titular de la autoridad legítima, pero ello obligaba a éste a mantener un mínimo de respeto formal al aparato institucional heredado. No era esto todo, sin embargo: aun controladas y divididas, las fuerzas armadas eran capaces de ejercer en ciertas situaciones-límite un poder de veto imposible de ignorar. El ejemplo más significativo de ello se alcanzó cuando un movimiento basado en los sindicatos favoreció en 1951 la presentación de la señora Perón como candidata a la vicepresidencia de la República. Sin duda los oficiales que osaron dar expresión al descontento militar ante la iniciativa formaban ya en las filas de los desafectos, y el que se hizo eco de él ante el gobierno nacional –el general Lonardi– vio por ello interrumpida su carrera con un pase a retiro; aun así la señora Perón juzgó prudente renunciar a sus ambiciones ante el hecho evidente de que el cuerpo de oficiales las hallaba totalmente intolerables.

El ejército era entonces a la vez un apoyo y un freno; si su segunda función era menos advertida que la primera esto se debía a que Perón –fuese prudencia, fuese coincidencia esencial con la orientación de la institución en que se había formado– eludió casi siempre explorar los límites que el apoyo de ella fijaba a su libertad de decisiones.

Esa libertad era con todo muy amplia en el plano estrictamente político; apenas si trabó la marcha hacia un creciente autoritarismo, al que sólo obligaba a mantener una vestimenta constitucional por otra parte no muy convincente. La Constitución misma fue reformada en 1949; se introdujeron en el texto de 1853 agregados vinculados con el derecho social y del trabajo, un decálogo de la ancianidad debido a la señora Eva Perón, un artículo imitado del modelo mexicano que nacionalizaba el subsuelo, y otro inspirado en estímulos más inmediatos que autorizaba la reelección presidencial, y que –según terminó por admitir un incauto convencional peronista– estaba sobre todo destinado a hacer posible la de Perón. Concluida la tarea

de la Constituyente, comenzó la de convencer al presidente de que en efecto presentara nuevamente su candidatura; a través, de la multitudinaria campaña pudo medirse el avance ya realizado hacia el encuadramiento oficial de la opinión pública en la Argentina peronista. La victoria electoral de Perón (acompañada de nuevo por Quijano, luego de que la fórmula Perón-Perón sucumbió al veto militar) hizo desaparecer las últimas ilusiones en cuanto a la posibilidad de utilizar la vía electoral para vencer al peronismo: una mayoría sin precedentes se había reunido para apoyar una candidatura que marcaba una ruptura abierta con la tradición constitucional, y ello ocurría cuando ya la prosperidad en cuya cima el peronismo había bogado tan airosamente entre 1945 y 1949 se transformaba en cosa del pasado. Pero la oposición, aunque minoritaria, era también ella irreductible, y demasiado numerosa y segura de su lugar en el cuerpo social argentino para aceptar una indefinida permanencia en las tinieblas exteriores. Ya antes de las elecciones de noviembre de 1951, en setiembre de ese año, la revolución encabezada por el general Menéndez, que sin embargo pudo ser reprimida rápidamente, señaló el fin de la etapa de seguro control del ejército por parte del sector oficialista: en 1952 –pese a la severidad de las sanciones impuestas a los complicados el año anterior– fue descubierto otro movimiento militar, y desde entonces las actividades conspirativas ya no cesaron aunque su eficacia parecía por el momento problemática, y el presidente se sentía lo bastante seguro de su poder como para hacer a los a menudo proyectos conspiradores militares víctimas frecuentes de su ironía algo gruesa, este hecho era sólo uno entre los que marcaban el comienzo de una etapa nueva en el equilibrio de fuerzas que había dado la primacía política a Perón.

Sin duda, entre esta etapa y la que quedaba atrás, la continuidad se daba en muchos aspectos, en particular en la tendencia hacia un autoritarismo creciente: la construcción de un aparato político que al alcanzar su madurez hubiera debido repetir con notable fidelidad las grandes líneas de los totalitarismos europeos siguió adelante. El sistema de enseñanza, que había sido depurado de elementos desafectos –de modo particularmente espectacular en la Universidad, varias veces intervenida y privada progresivamente de su autonomía por dos reformas sucesivas de la ley que la gobernaba– fue puesto al servicio del régimen; la figura marcial del general Perón y la figura angélica de su esposa –esta última a menudo envuelta en nubes delicadamente rosadas– comenzaron a decorar los libros de lectura para las escuelas primarias... Sólo muy tardíamente comenzó el régimen a interesarse en el encuadramiento de las distintas categorías profesionales en organizaciones de signo oficial; aun en cuanto a la clase obrera, aunque vigiló celosamente la efectividad de los descuentos de salarios con fines sindicales, no utilizó a fondo las posibilidades que el monopolio sindical de hecho abría para eliminar a los desafectos de la fuerza de trabajo; frente a las profesiones liberales sólo hacia 1953 intentó oponer a los colegios profesionales opositores una organización adicta –la Confederación General de Profesionales– que ejerció sólo limitada presión para ganar adherentes en esas categorías donde los adversarios eran abrumadoramente predominantes.

Del mismo modo las organizaciones empresarias fueron objeto de un lento asedio. La Unión Industrial cayó víctima de la acción oficial; la Sociedad Rural, por lo contrario, logró ser respetada, gracias en parte a la adopción de una actitud cada vez más circunspecta, que paulatinamente la llevó a participar –aunque siempre con mesura– en los coros de alabanzas que acompañaban ahora a las más nimias decisiones del gobierno. Menos fácil resultó al régimen crear organizaciones empresarias más sinceramente amistosas: finalmente, tras algunos intentos fallidos, la Confederación General Económica logró reunir adhesiones en ciertos sectores industriales y comerciales, sobre todo del Interior; menos enjundia alcanzó su rama agropecuaria, que nunca pudo ser rival seria de la Sociedad Rural.

Ese interés tardío por encuadrar en el frente oficialista a sectores sociales reacios a incorporarse a él, si podía no ser siempre cómodo para los que comenzaban a ser objeto de las atenciones del régimen, era también en cierto modo un signo de las transformaciones del peronismo. En 1950-51 la necesidad de ellas se hacía evidente: las nuevas tendencias en la relación entre los precios internacionales, agravadas por el peso de adversidades climáticas, agotaron las posibilidades de una política económica cuyo instrumento esencial era la transferencia de recursos del sector rural exportador a la economía industrial y urbana, y que dentro de esta última no podía –por razones de prudencia política– volver sobre los avances que bajo su égida había conocido el ingreso de los asalariados. La oposición veía ahora confirmada su fe en esa crisis económica en la que había creído contra toda apariencia durante los años de prosperidad; la búsqueda de culpas comenzó de inmediato: Perón habría sacrificado en exceso el interés rural, eliminando todo estímulo para un aumento de producción, mientras el aumento del consumo interno disminuía aun más los saldos exportables; habría carecido de una deliberada política de inversiones, capaz de dotar al país, durante la breve prosperidad, de la infraestructura y de las industrias básicas cuya ausencia seguía haciendo extremadamente vulnerable su economía. A esas críticas se contraponían (o aun se agregaban) las que reprochaban al régimen una excesiva timidez en el campo de la reforma social: había dejado intacta la base economicosocial de la Argentina rural, contentándose con privarla de los lucros de una serie de años excepcionales, y pasados éstos se veía forzado,

o a una radicalización ahora más difícil (ya que coincidía con una disminución del bienestar aun para los sectores populares) o a la búsqueda de un acuerdo con esos sectores dominantes que habría ignorado pero no debilitado, en momentos en que ellos estaban en mejores condiciones para mantener sus exigencias, no sólo porque una Argentina de economía ahora más compleja seguía sin embargo dependiendo de sus saldos exportables tan estrictamente como la tradicional, sino también porque la política oficial de precios había provocado una solidaridad nueva en los sectores rurales. Si en la década del 30 la Argentina rural se había expresado por medio de muchas voces discordantes, ahora los grandes terratenientes de la Sociedad Rural Argentina, los ganaderos medianos de las confederaciones de sociedades rurales, los arrendatarios de la Federación Agraria Argentina parecían opinar todos lo mismo; los avances del consumo interno frente a la exportación y la disminución del poderío de los frigoríficos en cuanto a la ganadería, la congelación de los arrendamientos y el rápido olvido de los planes de reforma agraria en las tierras del cereal habían atenuado las tensiones internas, y la hostilidad (cautamente expresada, pero muy decidida) se dirigía contra el gobierno que había sacrificado el campo a la ciudad y subsidiariamente contra el sector asalariado, identificado con la política oficial y numéricamente minoritario en la Argentina rural ... Por otra parte el gobierno peronista, obligado a aumentar el precio interno de las exportaciones, no estaba en condiciones de hacer mucho más que eso en obsequio de los descontentos productores rurales: una muy anunciada –pero modesta– reorientación del crédito bancario hacia el sector agropecuario no implicó por cierto un decisivo cambio de rumbo. No fue este el único aspecto en el cual las dificultades crecientes incitaron al gobierno, antes que a adoptar una política económica de signo distinto pero de ímpetu comparable con la seguida en su primera etapa, a mostrar una cautela creciente frente a las opciones que enfrentaba con urgencia cada vez mayor.

Cesada la etapa de abundancia, el gobierno podía advertir ahora que su libertad de movimientos era limitada: sus críticos de izquierda y de derecha tenían ambos razón; al favorecer la aparición de un bloque rural mejor consolidado que nunca en el pasado en torno de las clases terratenientes, al favorecer también la de un bloque urbano formado por asalariados y una parte de la clase media dependiente, más interesado en mantener sus acrecidos niveles de consumo que en contribuir con su sacrificio a cambios más profundos de la estructura económica, el peronismo había construido el laberinto del que ya no podría salir sin imponer un nuevo cambio aun más profundo en el equilibrio político del país. La segunda etapa peronista iba entonces a ser de perpleja y desazonada experimentación política; puesto que la coyuntura impone un nuevo equilibrio entre las bases urbanas del peronismo y las demasiado sólidas bases rurales de la economía exportadora, para el régimen se trata de hallar la fórmula que le permita sobrevivir tomando en cuenta esa circunstancia nueva. Las posibilidades políticas son dos: o una liberalización que permita a las fuerzas conservadoras aproximarse sin escándalo o un creciente autoritarismo que le permita emanciparse de su demasiado estricta dependencia de los sectores populares urbanos; ambas serán recorridas reiteradamente, y en desordenada sucesión, en esta última etapa de gobierno peronista.

Si hay muchas razones para entender el paso a esa etapa final, hay un hecho que no se vincula con ellas, pero parece marcar el momento de la transición: la muerte de Eva Perón, el 26 de julio de 1952. De nuevo una muchedumbre, ahora silenciosamente paciente, invade el centro de Buenos Aires: espera a lo largo de horas el breve momento en que podrá contemplar, bajo cristal y envuelta en los reflejos violáceos de una sabia iluminación, a la que fue a la vez la Dama de la Esperanza y la Abanderada de los Trabajadores, personificación del nuevo Estado por primera vez benévolo a las capas populares, pero a la vez de esas capas mismas, del rencor acumulado en su largo silencio por un pueblo acaso demasiado manso.

Así desaparecía la figura que mejor había encarnado lo que el movimiento peronista significaba para la mayoría de sus seguidores, y también de sus adversarios. Sin duda Eva Perón había expresado la ambigüedad profunda de ese movimiento, y ello no sólo a través de sus personales actitudes, de su apasionada rebeldía contra las pautas heredadas que escondía mal una implícita aceptación de esas pautas mismas, sino también y sobre todo de la función de intercesora que se había asignado en el orden peronista, que hubiese sido totalmente innecesaria si en efecto las masas movilizadas bajo ese signo político hubiesen sido tan hondamente transformadas en el proceso como gustaba de suponerse. Ello no impedía que Eva Perón, con su oratoria deliberadamente brutal (que le había ganado, junto con muy vasta popularidad, odios muy hondos y tenaces) personificara mejor que nadie lo que en el peronismo había de literalmente intolerable aun para algunos de los apoyos del régimen. Su desaparición parecía remover un obstáculo a la distensión política, y abrir para el movimiento peronista un horizonte sin duda más incierto, pero también –acaso– nuevas posibilidades de inserción en el marco político-social argentino.

Sin duda, esa reorientación había comenzado ya antes de la muerte de Eva Perón: en enero de 1951 el gobierno había debido enfrentar la primera gran huelga realizada ignorando sus exhortaciones: sólo la movilización militar puso entonces fin a la paralización del sistema ferroviario nacional. La aparición de ese hecho nuevo no significaba necesariamente que sectores significativos de la clase obrera abandonaran su

adhesión política al gobierno peronista; aun así era evidente que la nueva orientación económica de éste, menos sistemáticamente amistosa para el sector asalariado, lo estaba empujando a modificar, así fuera gradualmente, su fisonomía política. En una primera etapa son sobre todo los avances en sentido autoritario los que se hacen sentir; en 1951 una reforma de la ley electoral asegura al peronismo más sólidas mayorías parlamentarias, y los signos externos del mismo proceso se acentúan en 1952, con la elevación legal de Perón a la dignidad de Libertador de la República, y la de su esposa a la de Jefa Espiritual de la Nación; en ese mismo año de 1952, el segundo plan quinquenal, menos ambicioso que el primero en sus objetivos económicos, se ocupa en cambio de dar fuerza de ley a una determinada periodización de la historia argentina y consagrar al justicialismo (nombre dado al conjunto de principios doctrinarios del movimiento peronista) como Doctrina Nacional.

Al no cesar la resistencia –que por lo contrario, con el deterioro creciente del clima económico parece encontrar eco más amplio– la represión se hace más violenta. A comienzos de 1953 comienzan a escasear artículos esenciales; el 9 de abril aparece muerto Juan Duarte, hasta días antes secretario privado del presidente y considerado uno de los responsables de la especulación que la escasez estaba provocando (se lo acusaba de modo cada vez más general de haber organizado una red de mataderos clandestinos, proveedores del mercado negro de la carne). Perón lanza una violenta campaña de moralización de la administración pública y de las prácticas comerciales, apoyada en abundantes prisiones de tenderos y en un nutrido plan de actos públicos. En uno de ellos el discurso del presidente es interrumpido por el estallido de varias bombas; la respuesta inmediata es el incendio oficioso de las sedes de los partidos opositores y la del Jockey Club; a él siguen detenciones masivas de opositores, seleccionados de modo algo errático: la señora Victoria Ocampo, una parte de un equipo campeón deportivo, el decano de los filósofos argentinos, el más ilustre sobreviviente de la generación poética del Centenario, comparten la hospitalidad de la cárcel con políticos proyectos pero también con personas hasta entonces desconocidas, que ignoran qué ha podido llamar sobre ellas la atención del gobierno. El terrorismo cesa al ser descubierto el reducido grupo que se había lanzado a la acción directa, y que sufre trato atroz en las prisiones del régimen. Este, tras haber recorrido hasta extremos nuevos el camino de la represión, decidió tomar el de la apertura a nuevos contactos políticos: encontró para ello un primer interlocutor en el doctor Federico Pinedo, que en la cárcel había descubierto las ventajas de un estilo más apacible de lucha política, y en un mensaje que el ministro del Interior hizo público invitaba tanto al gobierno como a la oposición a adecuarse a él. Los grupos conservadores, luego de declaraciones en que el presidente de la República manifestaba coincidir en el deseo de paz y convivencia con los partidos opositores, se allanaron a visitar la Casa Rosada: tras recibir la visita de “esos caballeros que me han dicho palabras muy agradables”, Perón no se manifestó mejor dispuesto a levantar el estado de guerra interno, tal como le habían sugerido sus visitantes. Es que la iniciativa presidencial no encontraba eco igualmente grato en todos los sectores de la oposición. El socialismo tenía que enfrentar la acción de un sector divisionista muy cercano al Ministerio del Interior, y ello no aumentaba su receptividad a las sugerencias presidenciales; el radicalismo, por su parte –pese a su casi permanente crisis, que apenas necesitaba de estímulos externos– constituía el único grupo que había conquistado nuevas adhesiones agitando la bandera opositora: diez años después de la revolución de junio las clientelas electorales conservadoras y socialistas habían desaparecido, mientras la radical reunía nuevos apoyos en torno de la que había terminado por ser la única alternativa viable al peronismo; muy razonablemente la dirección radical no estaba dispuesta a arriesgar su ascendiente sobre esa masa de reclutas recientes mostrando ningún desfallecimiento en su celo opositor. A través de la disciplina opositora del radicalismo y el socialismo, era el aborrecimiento con que sus bases electorales enfrentaban al peronismo el que se hacía evidente; ese aborrecimiento era la manifestación temprana de un fenómeno que bien pronto iba a repetirse a escala latinoamericana: la reorientación conservadora de buena parte de las clases medias. Esa reorientación, herencia en la Argentina de la peculiarísima lucha política que se había planteado a lo largo de 1944 y 1945, conservó en los años siguientes su plena vigencia. Por cierto no había en el moderado programa de reforma social llevado adelante por el peronismo nada que afectara decisivamente la posición de las clases medias (salvo acaso de las rurales) pero faltó, por lo menos en los años de prosperidad en que el predominio político del peronismo llegó a parecer inmovible, todo intento serio de éste para adaptar su estilo político a preferencias que –razonables o no– eran de indudable arraigo en ellas. Ahora, en medio de un deterioro inocultable de la situación económica, no es sorprendente que las clases medias en su conjunto se mostrasen escasamente receptivas al intento oficial de encontrar un lenguaje común con ellas.

A fines de 1953 era ya evidente que la conciliación había fracasado; en abril de 1954 una elección general (para designar vicepresidente en reemplazo del fallecido doctor Quijano) mostró que la relación de fuerzas electorales permanecía estable: uno de cada tres electores era opositor, y en la Capital las distancias se acortaban. Sin duda, el peronismo no tenía mucho que temer por sus fortunas electorales futuras; sin duda

también sus mayorías eran comparables con las más abrumadoras conocidas en el pasado; aun así el tipo de organización política a la que el régimen se aproximaba cada vez más sólo se justificaba en términos de unanimidad y no de consenso mayoritario: el problema planteado por la supervivencia de una oposición numéricamente importante seguía en pie, y con esa pesada hipoteca el régimen debía encarar un cambio de rumbo que, a medida que iba siendo postergado, debía hacerse más radical.

Luego de una estabilización económica emprendida en 1953, al año siguiente las causas de desequilibrio –que no habían sido eliminadas– volvieron a hacerse sentir en todas sus dimensiones. Ante esa situación el gobierno trató primero de aumentar el ritmo productivo de la economía imponiendo un esfuerzo adicional a la fuerza de trabajo. En el Congreso de la Productividad, convocado a comienzos de 1955 con el masivo acompañamiento de propaganda que ya se había hecho habitual para todas las iniciativas del régimen, las dos entidades organizadoras –la CGT y la CGE– alcanzaron un fácil acuerdo, pero sobre términos algo inesperados: la razón de la baja productividad –dictaminó el Congreso– se encontraba en el equipamiento arcaico e insuficiente de la industria, que sólo podría ser corregido mediante nuevas inversiones masivas de capital y adquisiciones igualmente masivas de equipos que era preciso pagar en divisas. Pero la Argentina de 1955 no podía ya encarar esas tareas nuevas sin contar con apoyos financieros externos; los días de la independencia económica (solemnemente proclamada en 1947 como uno de los aspectos esenciales de la revolución peronista) estaban contados. Sin duda ya se habían introducido algunas derogaciones a esa altiva política: cinco años después de la repatriación de la deuda externa, la Argentina había comenzado nuevamente a recibir crédito extranjero; en 1953 una ley de radicación de capitales aseguraba a los futuros inversores extranjeros la posibilidad de efectuar remesas de sus ganancias (éstas habían sido las primeras víctimas del racionamiento de divisas, consecuencia de las dificultades crecientes en la balanza de pagos). Pero estos tímidos avances eran insuficientes para corregir el desequilibrio creciente de la economía argentina: éste debía llevar o a una etapa de creciente deterioro del nivel de vida –políticamente riesgosa– o a dosis más crecidas de la misma medicina que con mano vacilante el régimen peronista estaba suministrando ya al país. Por ese segundo camino se decidió finalmente Perón, lo que provocó creciente desazón entre sus adversarios. Entre ellos eran muy pocos los que, con la lucidez de un Federico Pinedo, veían en la política económica la razón última de su disidencia con el régimen, y estaban dispuestos a atenuarla apenas éste mostrara claros propósitos de enmienda; acaso no eran muchos más los que sinceramente se constituían en vestales de la sagrada llama del nacionalismo económico (aunque éste empezó a encontrar cada vez más intransigentes partidarios en las filas opositoras desde que el gobierno pareció dispuesto a borrarlo discretamente de sus banderas).

Más bien era el temor de que el camino que el régimen se aprestaba a tomar le diese no sólo la tranquilidad económica que necesitaba, sino también la respetabilidad internacional que nunca había alcanzado del todo –y que desde 1953 parecía buscar a través de un acercamiento a los Estados Unidos– el que explicaba la decisión creciente con que los grupos opositores enfrentaron la emergencia, resueltos a utilizarla para un enfrentamiento definitivo con el peronismo gobernante.

Este parecía ahora menos deseoso de eludir el conflicto. A lo largo de 1954 y 1955 fue solemnemente anunciada la adopción de una nueva política petrolera; por medio de la concesión de áreas de explotación a empresas norteamericanas el gobierno esperaba atenuar el desequilibrio en la balanza comercial –en el que las importaciones de combustibles habían llegado a tener una función negativa importante– y despertar una actitud más benévola en los centros financieros mundiales, capaz de traducirse en una más amplia corriente de inversiones. Esa nueva política, sin embargo, implicaba una revisión muy importante de principios que el séquito peronista consideraba básicos, y el gobierno quería medir, antes de implantarla, las reacciones que ella encontraba entre sus propios adictos. Al mismo tiempo pareció buscar un nuevo elemento de cohesión política en la lucha contra la Iglesia y su influjo en la vida nacional, que iba a llenar con su ruido y su furia la última etapa peronista.

¿A qué se debía esa súbita explosión de ira anticlerical? Como ya se ha visto, las relaciones entre gobierno e Iglesia hacía tiempo que eran menos íntimas de lo que las experiencias de 1944-46 hubieran permitido augurar, pero aun así no había en esa ambigua relación nada que permitiese anticipar la posibilidad de un choque violento. Por otra parte Perón nunca explicó claramente las causas del conflicto, ni podría haberlo hecho pues prefería negar la existencia del conflicto mismo, que en su versión se reducía a la legítima reacción de los sindicatos ante la acción individual de algunos eclesiásticos excesivamente amigos de la política. Si era posible adivinar tras esa explicación el temor a una intervención masiva de la Iglesia en el mundo del trabajo, es en cambio difícil encontrar elementos objetivos que justifiquen este temor mismo (aunque se estaban dando episodios de rivalidad entre sindicatos católicos y otros de obediencia peronista fuera de la Argentina, en particular en la Colombia de Rojas Pinilla). En todo caso, del conflicto con algunos eclesiásticos se pasó insensiblemente al institucional; la mal adormecida vena anticlerical de una opinión

pública que no se había caracterizado en el pasado por su espíritu constantemente devoto comenzó a ser evocada a través de la prensa oficialista, y no faltó algún proceso escandaloso que, tocando muy de cerca a un alto prelado, pareció servir de punto de partida para una campaña moralizadora de la vida eclesiástica modelada sobre la que en Alemania había tenido a su servicio la elocuencia del doctor Goebbels. A esta campaña de agitación (que hizo que muchos eclesiásticos hallaran más prudente no usar ropas talares fuera de las ceremonias de culto) siguió el lanzamiento de un conjunto heterogéneo de reformas que tenían en común el oponerse a las orientaciones o los intereses de la Iglesia. El divorcio absoluto, la equiparación de hijos legítimos y extramaritales, la legalización de los prostíbulos, la supresión radical de la enseñanza religiosa en el sistema de educación pública, la eliminación de las subvenciones a la enseñanza confesional figuraron entre ellos; debía coronarlos una nueva reforma constitucional, que introduciría la separación entre la Iglesia y el Estado.

La reacción de la jerarquía eclesiástica fue de una moderación extrema, y consternante para muchos de sus fieles, que vieron en ella el reflejo de la personalidad algo fatigada del cardenal primado (otros prelados, que hasta meses antes se habían caracterizado por la intensidad de su celo peronista, se manifestaban en cambio mejor dispuestos a una lucha abierta contra el régimen). Pero esa moderación –que llegó hasta autorizar a los fieles, en previsión de las presiones a que serían sometidos, a suscribir (con las adecuadas reservas mentales) los petitorios en favor de la proyectada reforma constitucional– era incapaz de gobernar la actitud de los sectores militantemente católicos de la opinión pública, cada vez más alarmados por una política anticlerical que amenazaba convertirse en antirreligiosa. Los que se tenían a sí mismos por representantes políticos del catolicismo, desde los antifascistas y antiperonistas que veían en el nuevo giro de la política oficial la confirmación de sus proféticas denuncias sobre el carácter anticristiano del régimen, hasta los de extracción nacionalista que habían dado por terminada su etapa de aproximación con él y estaban buscando un modo de conservar su ascendiente en la Argentina posperonista, rivalizaban en la agitación para mantener despierta esa protesta.

Sin duda, entre los que no habían esperado el conflicto con la Iglesia para situarse en la oposición la avalancha de conversos de la undécima hora despertaba sentimientos mezclados; aun así, reservándose la posibilidad de clarificar en el futuro lo que había de equívoco en la solidaridad de una oposición singularmente transformada por los últimos desarrollos, no renunciaban a utilizar las posibilidades que éstos parecían brindarles: en junio de 1955 la procesión de Corpus Christi ofreció a la oposición –y no sólo a la católica– la posibilidad de contarse y expresarse, y el resultado fue en verdad impresionante... Es que la ruptura con la Iglesia no sólo daba nuevos reclutas a la oposición (su aporte en este aspecto fue limitado, y acaso Perón no se equivocaba cuando subrayaba que su nueva política, si alejaba a hombres que le habían dado útil colaboración técnica y administrativa, no le restaba adhesiones electorales dignas de consideración), aumentaba además el clima de urgencia y de choque inminente en que vivía el país desde que el peronismo había comenzado a buscar un nuevo rumbo. Convencida de que la que se le abría era acaso la última oportunidad de librar abierta batalla contra el régimen, la oposición encontraba ahora en el alejamiento creciente entre el peronismo y la opinión católica un motivo para afrontar con mayor decisión la cercana prueba.

El 16 de junio –cinco días después de la desafiante procesión de Corpus– estallaba un alzamiento apoyado sobre todo por la marina de guerra. Luego de horas de combate en torno del edificio del Ministerio de Marina y de un bombardeo y ametrallamiento aéreo del centro de la capital por los revolucionarios, el gobierno pudo sofocar el reducido núcleo insurgente; esa noche, tras una concentración convocada por la Confederación General del Trabajo cuando aún duraban las acciones aéreas, las iglesias del centro de Buenos Aires fueron incendiadas; no resulta difícil comprender que, luego de ver caer a su lado a las víctimas del fuego rebelde, algunos de los manifestantes hayan visto en esos incendios una justa venganza; aun así, la espontánea cólera de una muchedumbre por otra parte raleada por la prudencia no basta para explicar la uniforme eficacia que la operación mostró en todas partes: al día siguiente otras muchedumbres comenzaban a recorrer, heridas en sus sentimientos piadosos (a veces algo improvisados), los templos cuyos muros calcinados dejaban ver –eliminados por el fuego los agregados de épocas más recientes y prósperas– los ladrillos pacientemente amontonados por los albañiles del setecientos. Si la situación hubiera dejado lugar, como en épocas menos tensas, a los observadores distantes, éstos hubiesen podido repetir, como sesenta y cinco años antes, que el régimen no habría de sobrevivir a su victoria sobre la rebelión: en todo caso la quema de las iglesias, ese acto de puro delirio, amedrentó sobre todo al gobierno que (en la hipótesis más caritativa) no había hecho nada por evitarlo. Otros aspectos de la jornada despertaban también alarma entre algunos sostenes ahora indispensables del régimen: la Confederación General del Trabajo había tomado intervención directa en el conflicto, y aunque ésta no había sido ni con mucho decisiva, significaba una novedad que no podía dejar de alarmar al ejército, que hasta entonces había logrado reservarse el monopolio

de la fuerza: el 16 de junio pudo verse cómo eran distribuidas armas en número considerable a los manifestantes obreros, y las sugerencias sobre la conveniencia de formar milicias sindicales que desde hacía un tiempo no escaseaban en la prensa oficialista, adquirirían con ello un sentido más preciso y amenazante.

Pero los incendios de esa noche marcaron el punto extremo en la singular radicalización ideológica que el peronismo había iniciado en el momento mismo en que se aprestaba a hacer suya una línea economicosocial decididamente conservadora; al día siguiente de ese hecho enorme el gobierno comenzó a mostrar una moderación nueva, y tan extrema que se acercaba por momentos a la atonía. Para muchos la explicación de ese súbito cambio era que Perón había sido mediatizado por los dirigentes militares que el 16 lo habían salvado del derrumbe, y que –según se suponía– le habían impuesto una estricta tutela. Ahora el presidente prometió poner a cargo del Estado la restauración de las recientes ruinas y dejó en manos del electorado, cuya convocatoria era por otra parte postergada, resolver sobre el lugar de la Iglesia católica en el aparato institucional argentino. No fueron esos los únicos signos de una actitud nueva: el ministro del Interior y el de Educación (estrechamente identificados con la línea de lucha contra la Iglesia) debieron abandonar rápidamente el cargo y el país; el señor Apold dejó la Secretaría de Prensa, en la que fue reemplazado por un veterano periodista que se manifestó dispuesto a hacer menos rígido el control de los medios de difusión. La política de la mano tendida se ampliaba para incluir en ella a la vieja junto con la nueva oposición: el 5 de julio Perón declaraba rehusarse a ver enemigos en los que ahora llamaba “grandes partidos populares”, a los que invitaba a una reconciliación en la que por primera vez –aunque sin ofrecer precisiones– prometía que el oficialismo haría también su parte: como prueba de la sinceridad de ese propósito los jefes de la oposición fueron autorizados para responder por radio a la propuesta presidencial. Lo hicieron de manera característica: el doctor Solano Lima, representante del conservadurismo, formuló un llamamiento abierto a todas las fuerzas opositoras, instándolas a derrocar al gobierno; si no invocaba explícitamente una revolución militar, era muy sugestiva la apelación al ejército, al que Perón había sólo recientemente achacado sus pasados servicios a la oligarquía, y al que el orador conservador invitaba a buscar sus aliados políticos entre los que en el pasado lo habían tratado con más constante cortesía... Hubiera sido inútil buscar cualquier incitación subversiva en el texto leído con voz algo sepulcral por el doctor Arturo Frondizi, recientemente ungido jefe del radicalismo. Tras asumir el compromiso de realizar en un marco de libertad la revolución económica y social a la que el peronismo estaba renunciando, y de prometer en nombre de su futuro gobierno un generoso perdón para los colaboradores del régimen, el doctor Frondizi fijaba a éstas condiciones extremadamente severas, a cambio de las cuales ofrecía tan sólo adoptar una línea de oposición constitucional. El respeto escrupuloso del marco de legalidad del que no quería salir no hacía menos grave el pronunciamiento del jefe radical, que reflejaba la fría decisión de no brindar cuartel al adversario en la hora de su crisis decisiva.

Ante esa helada recepción de sus proyectos pacificadores, Perón –que acababa de renunciar solemnemente a su condición de hombre de partido, cuya incompatibilidad con la de jefe de la nación acababa súbitamente de descubrir– volvió a actitudes en él más habituales. La pacificación dejaba saldo negativo para el régimen en lucha por la supervivencia, el frente opositor ampliado por la política anticlerical no había podido ser desarmado ni dividido por los tenaces esfuerzos oficiales. De ello se tuvo un nuevo signo cuando el exceso de celo de la policía política cobró una nueva víctima en el doctor Juan Ingalinella, dirigente comunista rosarino. Fue un diario vinculado con la curia rosarina el que comenzó una tenaz campaña para esclarecer la misteriosa desaparición de Ingalinella, fue el propio obispo de Rosario quien, en una muy publicitada visita a la casa del médico desaparecido, quiso participar a su esposa la inquietud de la Iglesia ante el episodio y la esperanza de verlo pronto aclarado... En esas condiciones la vuelta del peronismo a la lucha sin cuartel contra la oposición estaba lejos de significar la aparición de un vigoroso espíritu de ofensiva; era más bien el retorno a tácticas rutinarias y algo fatigadas ante el fracaso de las más nuevas que la situación misma había impuesto.

El 19 de agosto el Partido Peronista daba por terminada la tregua política; doce días después una confusa carta de Perón, en que anunciaba su decisión de retirarse del gobierno para eliminar un obstáculo a la pacificación, servía de prólogo a una nueva concentración popular ante la cual el presidente se apresuraba a retractarse y con contradicción sólo aparente llamaba a sus adictos a responder a la violencia (que se había traducido en nuevas explosiones de terrorismo) con la violencia; acuñando un nuevo *slogan* (que en el futuro, a diferencia de lo que ocurrió con los surgidos en etapas más felices, iba a ser recordado sobre todo por sus enemigos) invitó a matar cinco de éstos por cada peronista que cayera en las luchas que se avecinaban. A ese llamado a la lucha sin cuartel no siguió nada más importante que una reiteración muy frecuente de él por boca del presidente y de los dirigentes de su partido.

En setiembre la inquietud militar se acentuó, con altos oficiales prófugos, a los que el gobierno era incapaz de capturar; aun en esa hora grave la oferta que formuló la Confederación General del Trabajo de

apoyar la acción represiva con milicias obreras fue rechazada en términos apenas corteses por el ejército. El 16 de setiembre comenzaba el movimiento militar que pondría fin al régimen peronista. En Córdoba el general Lonardi dirigía las operaciones; las tropas adictas al gobierno no lograron eliminar el núcleo revolucionario y debieron aliviar su presión cuando las guarniciones cuyanas se unieron al alzamiento. Mientras otros conatos militares no lograban afirmar nuevos focos de rebeldía en el Interior, la marina de guerra íntegra se unió al movimiento; si debía abandonar su base de Río Santiago, conservaba Puerto Belgrano y lanzaba a la flota hacia el norte; el 19 de setiembre Mar de Plata era sometida a bombardeo naval y Buenos Aires amenazada de mismo trato si las fuerzas gubernativas no se rendían sin condiciones; el general Lucero anunciaba en nombre de éstas que cesaban la resistencia, y leía un documento en que el presidente, manifestándose dispuesto a afrontar el necesario renunciamento personal, se abstenía si embargo de toda dimisión expresa a su cargo. La situación quedó mejor aclarada al día siguiente cuando Perón se refugió en la embajada del Paraguay, de la que pasó a una cañonera de ese país anclada para reparaciones en el puerto de Buenos Aires. En ese inseguro refugio se hallaba el 23 de setiembre, cuando de nuevo una multitud se reunió en la Plaza de Mayo, ahora para escuchar al general Eduardo Lonardi, presidente provisional de la República Argentina.